



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00224
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ABIDAN RUÍZ TRUJILLO
EJECUTADA: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– EJÉRCITO NACIONAL
PROCESO NYR: 11001-33-35-026-2016-00213-00

La parte ejecutante, actuando a través de apoderado, ha solicitado que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre mandamiento ejecutivo por obligación de hacer en contra de la **Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional**, para que liquide y pague la totalidad de las obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018, de conformidad con los parámetros allí establecidos.

Por lo anterior, y luego de verificado el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir la demanda, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la misma, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades*”. En este sentido, el artículo 297 de la ley 1437 de 2011, prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)*”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de

2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Ahora bien, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción quedaron consagrados en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, señalándose los requisitos que deben reunir las mismas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.**
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

En similar sentido, el artículo 82 del Código General del Proceso, también trae consagrados los requisitos que deben contener las demandas que se promuevan **en todo proceso**, de la siguiente manera:

- “1. La designación del juez a quien se dirija.*
- 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
- 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*
- 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.*
- 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*
- 8. Los fundamentos de derecho.*
- 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.*
- 10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.*
- 11. Los demás que exija la ley.”*

De la misma manera, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

A su turno, y a través del decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos

procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, conforme a los presupuestos que indican las normas precedentes, se observa que la parte ejecutante, pretende que este despacho judicial libre mandamiento de pago de la siguiente manera²:

“PRIMERA: SE LIBRE MANDAMIENTO EJECUTIVO POR OBLIGACIÓN DE HACER PARA LIQUIDAR Y PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2018, en contra de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, de conformidad con los parámetros allí establecidos.

SEGUNDA: *Se condene en costas a la parte demandada.”*

A su turno, las pretensiones están fundadas en los hechos que se señalan a continuación:

“PRIMERO: *Mi mandante, el señor ABIDAN RUIZ TRUJILLO inicio demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la cual se tramito en el Juzgado VEINTISEIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA D.C.*

SEGUNDO: *Dentro del proceso de la referencia se dictó sentencia 12 DE JULIO DE 2018 la cual accedió a las pretensiones de la parte demandante en los siguientes términos:*

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTISEIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No 20165660729961 del 09 de junio de 2016 proferido por el Ministerio de Defensa Nacional - Sección de Nómina Ejército Nacional en cuanto negó el reajuste de la asignación básica del señor ABIDAN RUIZ TRUJILLOM identificado con la cédula de ciudadanía número3.556.977, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRAR PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION, respecto a las diferencias percibidas como salario básico y demás emolumentos salariales y prestaciones de todo orden, anteriores al 26 de mayo de 2012.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior, declaración y a título de restablecimiento del Derecho, CONDENAR a la NACION - MINISTERIO DE

² Fl. 7

DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, si aún no lo ha realizado, a revisar y reajustar la asignación básica salarial devengada por el señor ABIDAN RUIZ TRUJILLO de condiciones civiles ya reconocidas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), desde el 01 de noviembre de 2003, pero con efectos fiscales a partir del 26 de mayo de 2012 y hasta la fecha en la cual se genere el retiro definitivo del servicio, por haber operado la prescripción, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia. Adicionalmente, la pasiva deberá tener en cuenta la incidencia que tenga dicho reajuste en las demás prestaciones que percibida en actividad el demandante y que no hayan sido afectadas por la prescripción.

CUARTO.- La entidad demandada al momento de efectuar el correspondiente pago de las diferencias, deberá reajustarlas y actualizarlas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la fórmula señalada.

QUINTO.- DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva

SEXTO.- DAR cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 192 y s.s. del C.P.A.C.A.

SEPTIMO.- Ejecutoriado este fallo, por Secretaría expídanse las copias que corresponda, de conformidad con lo señalado por el artículo 114 del C.G.del P. y en los términos de la (s) solicitud (es) que se presenten. Para ello, la parte interesada deberá tomar las copias necesarias a su cargo, y aportar al expediente las mismas a través de memorial que debe ser radicado en la Oficina de Apoyo, luego de lo cual serán entregadas por Secretaría.

OCTAVO.- Una vez en firme esta sentencia, liquídese el expediente, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso si lo hubiere y archívese por la Oficina de Apoyo, dejándose las constancias a que haya lugar

TERCERO: El **01 de febrero 2019** se radicó sentencia para pago ante la demandada MINISTERIO DE DEFENSA de acuerdo a lo previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A. **CUARTO:** El 06 de junio de 2019, vía email se solicitó por parte de la entidad demandada documentos relacionados con la cuenta de cobro EXT-19-10301.

QUINTO: Mi mandante dio respuesta al requerimiento efectuado.

SEXTO: La suscrita radico Derecho de Petición el 18 de marzo de 2020, ante el Ministerio de Defensa solicitando se sirva certificar los salarios y prestaciones sociales que devengo mi mandante para el periodo comprendido a partir del 26 de mayo de 2012 y hasta la fecha en la cual se genere el retiro definitivo del servicio activo, con el fin de poder concretar la liquidación adeudada por la entidad en atención a lo ordenado en sentencia y de acuerdo a los parámetros allí establecidos y fecha exacta de pago de la sentencia.

SÉPTIMO: Mediante correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2020, la Coordinadora Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y

Cobro Coactivo del Ministerio de Defensa Nacional, nuevamente procede a informar el turno de pago, no da respuesta de fondo en cuanto a la solicitud de liquidación de las obligaciones contenidas en sentencia.

OCTAVO: *La sentencia dictada es TITULO QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO POR OBLIGACION DE HACER, POR CUANTO LA MISMA CONTIENE UNA OBLIGACIÓN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CONTENIDA EN LA SENTENCIA FECHADA 12 DE JULIO DE 2018 de conformidad a los parámetros allí establecidos, en contra de la demandada.*

NOVENO: *El Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA mediante auto dictado dentro del expediente 81-001-23-33- 003-2017-00042-01 (T.A.ARAUCA), número interno 00042 de 2018, doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018), respecto al caso similar que nos ocupa y dentro del expediente en cita revoca y “ordena librar mandamiento de pago, por cuanto la ejecución puede ser adelantada por la obligación de hacer contenida en título ejecutivo sentencia”*

DECIMO: *A la fecha mi mandante no ha obtenido el pago ordenado en el resuelve de la sentencia antes descrita.”*

Así las cosas, revisado el contenido de los enunciados normativos y al realizar la verificación de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda no cumple con la totalidad de estos, como se indica a continuación:

i. De las pretensiones de la demanda ejecutiva.

En primer lugar, lo pretendido por la parte ejecutante es que se libere mandamiento ejecutivo por obligación de hacer para que la entidad ejecutada **liquide y pague** la totalidad de las obligaciones contenidas en la sentencia de fecha 12 de julio de 2018.

Sin embargo, debe decir el Despacho que la pretensión invocada por la apoderada judicial de la parte ejecutante se torna confusa, habida consideración que, la interpretación que tiene el Despacho sobre el presente proceso ejecutivo, es que se libere mandamiento para que la entidad profiera el respectivo acto administrativo de cumplimiento a un fallo judicial, esto, teniendo en cuenta los hechos de la demanda ejecutiva, pues allí indica la Profesional del Derecho, que radicó ante la entidad la sentencia para su respectivo cumplimiento junto con unos documentos solicitados por la misma. Lo anterior, en el transcurso del año 2019.

Ahora bien, y en gracia de discusión, la Profesional del Derecho manifiesta en su escrito introductorio, que solicitó ante la entidad ejecutada la respectiva certificación de salarios y prestaciones sociales que devengó el actor a partir del 26 de mayo de 2012, hasta la fecha en la cual se genere su retiro del servicio activo, con el fin de concretar la liquidación adeudada

por la entidad, pero, también es cierto que, si la pretensión de la actora es el **pago de unas sumas de dinero**, deberá aportar al plenario la respectiva liquidación de lo que intenta que la entidad pague o demostrar que adeuda, debiendo para tal efecto modificar las pretensiones de la demanda ejecutiva.

Pero si, por el contrario, la parte activa lo que pretende con el presente ejecutivo, es que la entidad expida el correspondiente acto administrativo y dé cumplimiento a un fallo judicial, ello implicaría claramente, que no se ordenaría el pago de sumas de dinero.

Aunado a lo anterior, observa el Despacho que la parte actora, si bien indica que radicó ante la entidad los documentos respectivos para el cumplimiento a un fallo judicial, también lo es que, no se encuentra incorporado al plenario la solicitud de cumplimiento radicada dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 192 inciso 4 del CPACA.

Por ende, el interesado debe, no solo arribar copia de la sentencia en los términos del art. 114 del C.G.P., sino también, de la solicitud de cumplimiento dentro de los 3 meses siguientes o en el momento que se hubiese efectuado, copia completa del acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia, así como de la respectiva liquidación efectuada por la demandada, explicando además las inconsistencias en la liquidación y la prueba para demostrar dicho yerro.

Por tal razón, la activa deberá adecuar las pretensiones de la demanda ejecutiva, explicando de manera clara y precisa si lo que se pretende es únicamente que, se libre mandamiento con la finalidad que la entidad profiera el respectivo acto administrativo para dar cumplimiento a una orden judicial, o si por el contrario, lo que pretende es que se profiera la correspondiente resolución y a su vez, el pago de la sentencia, para lo cual deberá allegar la respectiva liquidación, explicando para tal efecto, en cada pretensión, los valores que presuntamente adeuda la entidad al ejecutante.

Lo anterior, por cuanto no es posible para el Despacho realizar conjeturas propias para librar mandamiento de pago conforme, sino que debe atenderse lo solicitado por quien demanda, lo que a su turno, permitirá a la entidad manifestarse y ejercer su derecho de defensa de manera puntual frente a lo pretendido.

ii. De la petición de cumplimiento ante la entidad

Así mismo, y para efectos de realizar un estudio más preciso, se hace necesario contener copia completa de la petición elevada por la parte actora, con fecha de recibido, en la cual solicita de manera puntual el cumplimiento a un fallo judicial, lo anterior, con el fin de determinar si existe o no cesación de intereses, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA,

dado que no fue allegada al expediente, motivo por el cual, la parte actora deberá allegar dicho pedimento al expediente.

Debe aclarar el despacho, que dicho requisito es indispensable, en el evento que, la Profesional del Derecho adecue las pretensiones de la demanda con **el objetivo de obtener el pago total o parcial de los haberes adeudados** por la entidad ejecutada en virtud de la orden proferida por este Despacho Judicial a través de sentencia de calenda 12 de julio de 2018.

Al respecto, debe decir el Despacho que, a pesar de existir una sentencia como título ejecutivo, la obligación no dimana únicamente de este documento, en el entendido que el título en este caso es complejo y por ende, para determinar un cumplimiento de la sentencia y/o determinar un saldo insoluto, se deben arribar los documentos que le prueben al juez necesariamente que hubo un error en la liquidación que realizó la entidad demandada para dar cumplimiento a la sentencia. Solo así, puede el juez librar mandamiento ejecutivo, pues en este momento, de la documentación aportada como prueba, únicamente se puede establecer que la entidad ejecutada solo realizará el pago de lo adeudado una vez llegue el turno asignado a la cuenta.

iii. De la dirección de notificaciones judiciales

El artículo sexto del derecho 806 de 2020, señala:

“Artículo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda”.

Sombreado y subraya fuera de texto

Por lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en la norma *ibidem*, encuentra el Despacho que, en el ítem de notificaciones de la demanda, la apoderada registró la misma dirección de correo electrónico tanto para ella como para la demandante, y en este sentido no se cumple a cabalidad con lo establecido en la norma antes endilgada.

En este sentido, se deberá indicar el canal digital y/o correo electrónico de notificaciones, en donde el demandante, directa y efectivamente, podrán recibir notificaciones judiciales, sin que pueda ser la misma de la apoderada.

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación al artículo 8° de la norma antes señalada, la apoderada judicial deberá afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a

notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes.

Bajo los anteriores parámetros, las pretensiones de la demanda deben ser ajustadas, atendiendo las consideraciones realizadas, para establecer que la demanda haya sido presentada en debida forma y que la obligación cobrada cumpla con la carga de ser clara, expresa y actualmente exigible.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA EJECUTIVA instaurada por **ABIDAN RUÍZ TRUJILLO** contra la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

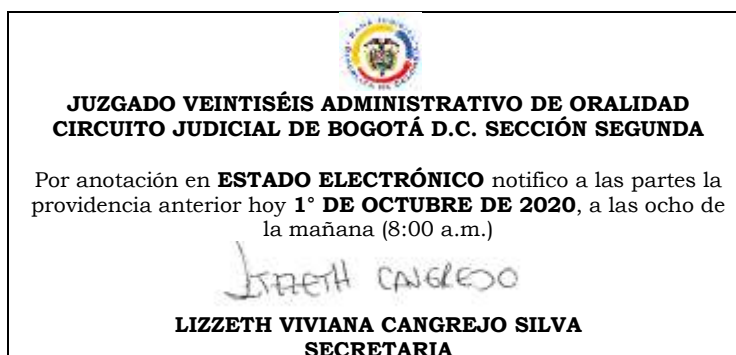
Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

20

Firmado Por:

**ANDRES
QUINTERO**



**JOSE
GNECCO**

**JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7ff9c283b40ff3ffb05f04fec3488af69e5527d53dbe09dbb9ea29a22a31dad2
Documento generado en 30/09/2020 07:25:29 a.m.